PODER JUDICIAL
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SENTENCIA y voto de minoría relativos a la Controversia Constitucional 35/2000, promovida por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del propio Estado.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 35/2000.

ACTOR: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PONENTE MINISTRO: JOSE RAMON COSSIO DIAZ.

**SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGON
Y ROBERTO LARA CHAGOYAN.**

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día **veintidós de junio de dos mil cuatro.**

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cleto Humberto Reyes Neri, con el carácter de Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional en representación del Poder Judicial de la entidad, contra actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo locales, los que hizo consistir en la expedición de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, así como su promulgación y publicación en el Periódico Oficial de la entidad, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil.

SEGUNDO. La parte actora manifestó como antecedentes, en síntesis, lo siguiente:

a) Que el nueve de junio de mil novecientos noventa y nueve, diversos Diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes, presentaron la iniciativa de ley denominada "**Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**", la cual tenía como únicos y específicos destinatarios al Poder Ejecutivo y a los Municipios de la entidad.

b) Que el doce de julio de dos mil, la Comisión Legislativa y de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Aguascalientes, emitió el dictamen aprobatorio de la iniciativa de ley mencionada, el que incluyó como destinatario al Poder Judicial local.

c) Que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes remitió al Gobernador Constitucional de la entidad, para efectos de su promulgación, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, la que fue publicada en el Periódico Oficial local, el veinticinco de septiembre del año dos mil.

TERCERO. Los conceptos de invalidez expresados son, en síntesis, los siguientes:

1. Que a la luz de la división de poderes y del federalismo, consagrados en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía e independencia son los principios rectores de los poderes judiciales de las entidades federativas, los cuales implican la inamovilidad, inmutabilidad salarial y carrera judicial de sus miembros, a fin de proporcionar a los gobernados una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal de la República; sin embargo, señala el actor, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes rompe con tales principios de autonomía e independencia, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

a) El artículo 1o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes establece, en esencia, que dicho ordenamiento legal tiene por objeto regular las acciones relativas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza que realicen los sujetos de la propia Ley, entre ellos, el Poder Judicial del Estado.

b) De los artículos 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 11, párrafo segundo, 36, 37, 38, 42 y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, se advierte que la autorización, disposición y manejo de los recursos presupuestales del Poder Judicial de la entidad, queda en manos del Poder Ejecutivo local, por conducto de su titular y de sus Secretarios de Administración, Desarrollo Social, Finanzas y Contraloría, porque son ellos los que tienen las facultades de decidir cuándo, cuánto, cómo y bajo qué condiciones será utilizado, aplicado e invertido el presupuesto del Poder Judicial del Estado, en materia de adquisiciones de bienes y servicios.

c) La Ley impugnada, en relación con el Poder Judicial local, condiciona las licitaciones a la autorización de un Comité de Adquisiciones integrado, entre otros, por representantes de la Secretaría de Finanzas, de la Contraloría General, del Comité de Planeación del Estado y de la Cámara o Asociación del ramo correspondiente, los que tienen derecho de voz y de voto en las decisiones que tome el propio Comité; además que dicho Comité de Adquisiciones, sobre el particular, cuenta con facultades para hacer nombramientos de servidores públicos del Poder Judicial de la entidad.

d) El artículo 107 de la Ley impugnada concede a la Contraloría General del Estado facultades de vigilancia, inspección y comprobación en materia de adquisición y enajenación de bienes del Poder Judicial local.

e) El artículo 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes sujeta la resolución de los recursos administrativos que puedan resultar de su aplicación, a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado, incluyendo al Poder Judicial. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 1o. de ese ordenamiento, prevé que **“...las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública centralizada y descentralizada del Estado de Aguascalientes y de los Municipios que lo integran...”**

Por lo que la Ley, cuya invalidez se demanda, infringe la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, pues permite que su presupuesto quede en manos del Poder Ejecutivo local y, si bien, en la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar al texto actual del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, se señaló que: **“los órganos de los poderes judiciales deben contar con el apoyo financiero que guarde adecuada relación con la importancia del servicio público que presta, pues de otra suerte se les inhabilita para contribuir al mejoramiento de la administración de justicia”**, ello no debe entenderse en el sentido de que el Poder Ejecutivo administre los recursos materiales destinados al Poder Judicial, sino que proporcione la cantidad financiera suficiente para la consecución de sus fines, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución, sin intervenir en su administración.

2. Que procede declarar la invalidez de la Ley impugnada, en virtud de que conculca la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ni en la exposición de motivos ni en el dictamen que resolvió la iniciativa de la Ley hoy combatida, se fundan ni motivan las razones que se tuvieron para adoptar la resolución propuesta, esto es, sujetar al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes a la Ley Patrimonial impugnada.

3. Por último, señala que este Alto Tribunal, en su caso, debe corregir los errores que advierta de los preceptos invocados y examinar en su conjunto los razonamientos expuestos en la demanda, a fin de que resuelva la cuestión efectivamente planteada y supla la deficiencia de la queja, en términos de los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, además, que aplique al caso la tesis de jurisprudencia número 68/96, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Epoca, página 325, que al rubro dice: **“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURIDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.”**

CUARTO. Los preceptos que se estiman violados son el 16 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de fecha treinta de octubre de dos mil, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional planteada, bajo el número 35/2000, y designó por turno como instructor al Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

Por auto de fecha treinta y uno del mismo mes y año, el Ministro instructor reconoció la personalidad con la que compareció el promovente; admitió la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas, y ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestare lo que a su representación correspondiere.

SEXTO. Mediante oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Felipe González González, con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, contestó la demanda de controversia constitucional manifestando, en síntesis, los planteamientos siguientes:

1. Que son ciertos los actos que de él se demandan, a saber, la promulgación y publicación de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

2. Que los actos por él emitidos fueron en estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32, 35, 46, fracción I, y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

SEPTIMO. Por oficio presentado por correo certificado y recibido el veintisiete de diciembre de dos mil, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Diputados Jorge Eduardo Suárez Muñoz y Luis Macías Romo, con el carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, respectivamente, contestaron la demanda de controversia constitucional manifestando, en esencia, las cuestiones siguientes:

1. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso h), del propio artículo 105, de la Constitución, en virtud de que las controversias constitucionales previstas en esa hipótesis, se refieren a aquellas que se susciten entre dos poderes de un mismo Estado, mas no entre los tres poderes, como ocurre en la especie, esto es, el Poder Judicial contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes; por lo que debe sobreseerse la controversia constitucional, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia.

2. Que en la demanda de controversia constitucional se cuestiona la falta de fundamentación y motivación de la exposición de motivos y del dictamen que resolvió la iniciativa de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes; sin embargo, señala que esta vía no es la idónea para analizar esos cuestionamientos, sino que el medio adecuado para ello sería el juicio de amparo.

3. Que resulta infundado el argumento del demandante, en el sentido de que la Ley impugnada viola la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, toda vez que a la luz del principio de división de poderes, corresponde al Poder Judicial aplicar la ley a los casos concretos, es decir, es quien ejerce jurisdicción en el Estado, de lo que se infiere que con la aplicación de la Ley Patrimonial tildada de inconstitucional, en ningún momento se viola la autonomía e independencia de funciones, ya que del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, no se desprende que al Poder Judicial correspondan atribuciones de administración.

4. Que la Ley impugnada no viola el principio constitucional de división de poderes, ya que no atenta contra la autonomía e independencia del Poder Judicial local, si se toma en consideración que en su artículo 5o. se define lo que debe entenderse al considerar como sujeto de la ley al Poder Judicial local, estableciéndose en ese mismo artículo todos los elementos necesarios para que sea aplicada a dicho destinatario. Que además, el artículo 4o. de la propia Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, en su párrafo segundo dispone, por analogía, que cuando la Ley haga referencia al titular del Poder Ejecutivo local, debe entenderse, en su caso, el representante del Poder Judicial de la entidad. Señala, asimismo, que debe recordarse que la Nación no está regulada por un sistema rígido de división de poderes, sino por un sistema flexible, atento a la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 51, Primera Parte, Séptima Epoca, página 18, que aparece publicada con el rubro: ***"DIVISION DE PODERES. LA FUNCION JUDICIAL ATRIBUIDA A AUTORIDADES EJECUTIVAS NO VIOLA EL ARTICULO 49 DE LA CONSTITUCION FEDERAL (ARTICULO 48 DE LA LEY DE APARCERIA DEL ESTADO DE NUEVO LEON)."***

5. Que en los artículos 37 y 38 de la Ley Patrimonial impugnada, se regula la integración de un Comité de Adquisiciones y Enajenaciones, el cual, en relación con el artículo 5o., debe integrarse dentro del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes por sus propios miembros, por lo que de ninguna manera se transgrede su autonomía e independencia, ya que tiene libre disposición y manejo de sus recursos presupuestales y es éste el que tiene la libertad de decidir cómo serán aplicados para la adquisición de bienes y servicios y, en consecuencia, tampoco se contrapone a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, en virtud de que no se restan las facultades administrativas que en ella se otorgan al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, de tal suerte que el Poder Judicial no se subordina en forma alguna al Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes.

6. Que resulta infundado el argumento de la parte actora, en cuanto a que el Congreso del Estado omitió fundar y motivar el dictamen que resolvió la iniciativa de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, toda vez que la supuesta omisión fue colmada a plenitud con la resolución por medio de la cual se aprobó el dictamen de referencia y se dio por concluido éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Interior del Congreso de la entidad; además que del artículo 42 del Reglamento en cita, no se desprende que deba declararse inválida determinada iniciativa de ley, por el solo hecho de no fundar y motivar debidamente un proyecto de texto legislativo, siendo aplicable al respecto, la tesis del jurisprudencia número 146, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Séptima Época, página 149, que aparece publicada con el rubro: **“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.”**

OCTAVO. Por oficio número PGR/038/2001, presentado el veintiséis de enero de dos mil uno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Procurador General de la República externó, en síntesis, los puntos siguientes:

1. Que el planteamiento formulado en la contestación de la demanda por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en el sentido de que no participó en la aprobación de la Ley Patrimonial del Estado, sino que la promulgó y publicó en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales sin afectar el interés legítimo del demandante, debe quedar sujeto a la determinación a que se llegue sobre la constitucionalidad de la propia norma general impugnada.

2. Que debe desestimarse la causal de improcedencia formulada por el Congreso del Estado de Aguascalientes, según la cual, conforme a la fracción I, inciso h), del artículo 105 de la Constitución Federal de la República, sólo procede la vía de la controversia constitucional entre dos poderes de un mismo Estado, siendo que en la especie la controversia se da entre los tres poderes del Estado de Aguascalientes. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional en cita establece que un poder podrá demandar a otro respecto de los actos o disposiciones de carácter general que emita, lo cual no limita a que sólo se dé entre dos poderes de un mismo Estado, sino que uno puede demandar a los otros dos, si tanto el Legislativo como el Ejecutivo intervinieron en el proceso legislativo que dio origen a la norma general impugnada.

3. Que los artículos 1o., fracción IV, 4o. y 5o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes violan el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal de la República, por la inclusión del Poder Judicial de la entidad en el cumplimiento de dicha Ley, ya que si bien es cierto que el Poder Legislativo local se encuentra facultado para regular los aspectos administrativos que infieran en el control, manejo y distribución del presupuesto del Poder Judicial del Estado, también lo es que sólo puede hacerlo a través de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, ya que estas disposiciones están íntimamente ligadas con la estructura, atribuciones y funcionamiento del propio Poder Judicial local.

4. Es innecesario el estudio de la falta de fundamentación y motivación de la exposición de motivos y del dictamen que resolvió la iniciativa de la norma general impugnada, en cuanto a justificar la inclusión del Poder Judicial local como sujeto de la misma, por resultar fundado el primer concepto de invalidez, conforme a lo manifestado con anterioridad.

NOVENO. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil uno, se celebró la audiencia prevista en los artículos 29 y 34 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se dieron por presentados los alegatos y, agotado el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.

DECIMO. Mediante proveído de fecha tres de diciembre de dos mil tres, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación remitió el presente asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, a quien le correspondió continuar como instructor de la presente controversia constitucional, en virtud de que el Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, anteriormente designado para ello, concluyó su encargo como integrante de este Alto Tribunal.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal de la República; y 10, fracción I, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, toda vez que se plantea un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, respecto de una norma general como lo es la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el veinticinco de septiembre de dos mil.

SEGUNDO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente.

En la presente vía se impugna la expedición de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, así como su promulgación y publicación en el Periódico Oficial de la entidad el veinticinco de septiembre de dos mil.

Ahora bien, para efectos de la oportunidad de la demanda, en relación a normas generales como la que se impugna en esta vía constitucional, la fracción II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para interponer la demanda es de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.

Según se desprende de la edición número treinta y nueve del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el cual obra agregado a fojas de la setenta y siete a la ochenta y ocho vuelta de los autos, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes fue publicada el veinticinco de septiembre de dos mil. Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días para la interposición de la demanda comenzó a correr a partir del martes veintiséis de septiembre de dos mil y concluyó el jueves nueve de noviembre del mismo año, en la inteligencia de que se descontaron los sábados treinta de septiembre, siete, catorce, veintiuno y veintiocho de octubre, así como el cuatro de noviembre; los domingos uno, ocho, quince, veintidós, veintinueve de octubre y cinco de noviembre; así como los días jueves doce de octubre, miércoles primero y jueves dos de noviembre, por ser todos éstos inhábiles, en los que no corrieron términos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2o. y 3o., fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, si la demanda de controversia constitucional se presentó el veinticuatro de octubre de dos mil, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende del sello de recepción que aparece a foja treinta y cinco vuelta del expediente, es evidente que fue presentada oportunamente.

TERCERO. Acto continuo, procede realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

En el escrito de demanda se aprecia que quien promueve la controversia constitucional es el Magistrado Cleto Humberto Reyes Neri, con el carácter de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes, en representación del Poder Judicial de la entidad, el cual acredita esa calidad con la copia certificada del acta de sesión de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, celebrada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, en la cual fue designado como su Presidente.

El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.

El artículo 51, párrafo último, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece lo siguiente:

“ARTICULO 51. (...) La representación del Poder Judicial de Aguascalientes corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su Presidente.”

Asimismo, el artículo 11, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, dice lo siguiente:

“ARTICULO 11. Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

I. Representar al Supremo Tribunal de Justicia en particular o en general al Poder Judicial del Estado, en los términos que establezcan las leyes, así como en los actos oficiales que se verifiquen, pudiendo para estos efectos designar como su representante a uno de los Magistrados.

(...)"

De este modo, si el promovente comparece a nombre y en representación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, es inconcuso que tiene la legitimación necesaria para ejercer la presente acción de controversia constitucional.

CUARTO. A continuación procede el análisis de la legitimación de la parte demandada, en atención a que ésta es una condición necesaria para la procedencia de la acción. Para ello, ha de comprobarse que la parte demandada esté obligada por la ley para satisfacer la exigencia de la demanda, en caso de que resulte fundada.

Las autoridades demandadas en esta vía son los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Ambos poderes cuentan con legitimación pasiva en el presente juicio, toda vez que al primero se le imputa la expedición de la norma general cuya invalidez se demandó, esto es, la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, y al segundo, su promulgación y publicación, en tanto que ambos son poderes contemplados en el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, para intervenir como demandados en las controversias constitucionales.

De conformidad con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, la parte demandada puede comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. La parte final del mencionado párrafo señala que la representación legal de quien acude a juicio puede presumirse, salvo prueba en contrario.

En la especie, quienes suscriben la contestación de la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, son los Diputados Jorge Eduardo Suárez Muñoz y Luis Macías Romero, con el carácter de Presidente y Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, respectivamente. La personalidad con que comparecen la acreditan con la certificación de la sesión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil, por el Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura de la entidad, en la que designó su Mesa Directiva y, en el caso, aparece que los signantes fueron designados en los cargos antes mencionados para fungir en el mes de diciembre del mismo año.

Ahora bien, ni la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, ni la Ley Orgánica del Congreso del Estado contemplan quién tiene la representación del Poder Legislativo de la entidad. En este contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, debe presumirse que el Presidente y el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, gozan de la representación legal del Poder Legislativo de dicha entidad federativa. Esta presunción se mantiene en la presente resolución en tanto que no existe en el expediente constancia alguna que arroje alguna prueba en contrario con respecto a la representación del Poder Legislativo local referido.

Por su parte, Felipe González González, con el carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, suscribe la contestación de demanda en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa. Dicho carácter lo acredita con el Decreto número 148, expedido por el Congreso del Estado de Aguascalientes, en el que se le declaró como Gobernador Constitucional del Estado. Tal decreto aparece publicado en la primera página del volumen número cuarenta y dos del Periódico Oficial del Estado, de fecha dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, de la cual obra copia certificada en el expediente.

El artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establece lo siguiente:

"ARTICULO 32. El Poder Ejecutivo se deposita en un individuo que se denominará Gobernador del Estado."

Por lo que, si el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes se deposita en el Gobernador, entonces es inconcuso que éste se encuentra legitimado para intervenir en la presente controversia en representación de aquél.

QUINTO. El Procurador General de la República, quien compareció a la presente Controversia Constitucional, está legitimado para intervenir en ella por ser parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEXTO. Previamente al estudio de la cuestión fundamental controvertida, procede analizar las causales de improcedencia alegadas por las partes en este procedimiento, por tratarse de una cuestión de orden público.

El Congreso del Estado de Aguascalientes, al contestar la demanda, invocó la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso h), del propio artículo 105, de la Constitución, por considerar que las controversias constitucionales previstas en esa hipótesis, se refieren sólo a aquéllas que se susciten entre dos poderes de un mismo Estado, mas no entre los tres poderes, como afirma que ocurre en la especie.

No asiste la razón a la parte demandada en atención a las siguientes consideraciones:

Cierto es que la fracción I, inciso h), del artículo 105, de la Constitución Federal de la República hace referencia literal a que las controversias constitucionales se suscitan entre dos poderes de un mismo Estado; sin embargo, ello no puede entenderse en el sentido numérico estricto de que cada controversia únicamente pueda tener a un poder como actor y a otro como demandado. Por el contrario, debe entenderse que, satisfechos los requisitos de legitimación previstos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las controversias es posible que como parte actora o demandada concurren más de dos poderes. En todo caso, es la naturaleza del conflicto en cuestión lo que determina en cada ocasión el número y posición procesal de los poderes contendientes, y no así la interpretación literal de lo establecido por el órgano reformador de la Constitución en el inciso h) de la fracción I del artículo 105 de nuestra Norma Fundamental.

Atendiendo a la materia de la presente controversia, si lo demandado es producto del procedimiento llevado a cabo por el órgano legislativo compuesto por el Congreso del Estado de Aguascalientes y por el Ejecutivo estatal, necesariamente debe tenerse a estos dos últimos como partes demandadas, pues sólo así es posible que las autoridades emisora y promulgadora del ordenamiento estén en aptitud de defender su constitucionalidad. Por lo demás, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en las controversias constitucionales tienen el carácter de demandados quienes hubieren emitido y promulgado la norma general objeto de la demanda. En la especie, ese carácter lo tienen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, respectivamente.

Por último, referente al argumento esgrimido también por el Congreso del Estado de Aguascalientes, en el sentido de que la controversia constitucional no es la vía idónea para cuestionar la falta de fundamentación y motivación de la exposición de motivos y del dictamen que resolvió la iniciativa de la norma general impugnada, cabe señalar que, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia número 98/99 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de controversias constitucionales se pueden analizar todo tipo de violaciones a la Constitución Federal de la República. Así las cosas, no asiste la razón al Congreso del Estado de Aguascalientes, dado que toda denuncia de falta de motivación y fundamentación de cualquier acto de autoridad se ubica en el supuesto antes señalado.

La tesis invocada es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Epoca, página 703, y a la letra dice:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIONES A LA CONSTITUCION FEDERAL. Los Poderes Constituyente y Reformador han establecido diversos medios de control de la regularidad constitucional referidos a los órdenes jurídicos federal, estatal y municipal, y del Distrito Federal, entre los que se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna, cuya resolución se ha encomendado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. La finalidad primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de mil novecientos noventa y cinco, de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, consistente en que la actuación de las autoridades se ajuste a lo establecido en aquélla, lleva a apartarse de las tesis que ha venido sosteniendo este Tribunal Pleno, en las que se soslaya el análisis, en controversias constitucionales, de conceptos de invalidez que no guarden una relación directa e inmediata con preceptos o formalidades previstos en la Constitución Federal, porque si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el

ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado, así como al fortalecimiento del federalismo, cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control.”

No existiendo diversa causal de improcedencia o motivo de sobreseimiento invocados por las partes o que este Alto Tribunal advierta de oficio, se pasa al estudio de la cuestión fundamental controvertida.

SEPTIMO. Dado que se trata de una cuestión de estudio preferente, se procede al análisis del concepto de invalidez referido a la falta de fundamentación y motivación del proceso legislativo de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

En esencia, la parte actora señaló que ni en la exposición de motivos, ni en el dictamen que resolvió la iniciativa de la Ley impugnada, se fundan ni motivan las razones que se tuvieron para sujetar al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes a la Ley Patrimonial impugnada. Sostuvo que, en tales condiciones, procedía declarar la invalidez de la Ley impugnada, en virtud de que conculcaba la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Señaló asimismo que, para lograr el trámite legislativo de una iniciativa de ley, el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes remite a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso local. Dado que no se ha expedido aún el Reglamento Interior y de Debates, resulta aplicable el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Aguascalientes, mismo que en sus artículos 42, 44 y 49, establece que toda iniciativa de ley, así como todo dictamen de las Comisiones Legislativas, deben estar en su parte expositiva suficientemente fundados y motivados, so pena de su invalidez.

Los argumentos antes señalados son infundados en atención a las siguientes consideraciones:

Este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que la fundamentación y motivación de un acto legislativo debe entenderse satisfecho cuando el Congreso que expide la Ley está constitucionalmente facultado para ello y las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.

Este criterio se contiene en la tesis de jurisprudencia número 146, publicada en la página 159, Tomo I, materia constitucional, Tribunal Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete - mil novecientos noventa y cuatro, que dice:

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.”

En el caso, la fundamentación de la expedición de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes que fue impugnada, se encuentra debidamente satisfecha, atendiendo a que la facultad del Congreso del Estado de Aguascalientes para legislar en todas las materias (incluida la que nos ocupa), deriva del artículo 27, fracción I, de la Constitución local, que establece:

“Artículo 27. Son facultades del Congreso:

I. Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación.”

Dado que el Congreso de la Unión no tiene facultades expresas para legislar en materia de patrimonio de los poderes públicos de las Entidades Federativas, entonces nada impide que esa materia pueda ser regulada por las legislaturas locales, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.”

Así, dado que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en la materia que nos ocupa, y sí el Congreso del Estado de Aguascalientes, es inconcuso que la inclusión del Poder Judicial local como destinatario de la Ley impugnada, no resulta violatoria de ningún precepto constitucional. Llegar a la conclusión contraria, significaría tener que admitir que, o no sería factible establecer normas respecto del patrimonio de los poderes judiciales de los estados, o tener que admitir que el Poder Judicial local, por sí mismo, podría darse la totalidad de las normas generales que rigieran su organización, presupuestación, etcétera.

Por su parte, el requisito de motivación también se encuentra satisfecho en virtud de que de la iniciativa respectiva se advierte que se consideraba necesario legislar en materia patrimonial del Estado, dado que se carecía de una legislación específica y que las disposiciones que existían estaban dispersas e incluso se contradecían. Por ello se consideró indispensable, según se aprecia en la citada iniciativa, agrupar y ubicar las disposiciones dispersas en una sola Ley para evitar las contradicciones y las lagunas jurídicas que existían.

Por lo tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de fundamentación y motivación del proceso legislativo, es claro que tanto la exposición de motivos, como el dictamen correspondiente se ajustan a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal.

OCTAVO. La parte actora cuestiona la constitucionalidad de los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 11, párrafo segundo, 36, 37, 38, 42, 47, 107 y 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes por considerar, en esencia, que violan en perjuicio del Poder Judicial de dicho Estado, las garantías de independencia y autonomía judiciales, previstas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

(...)

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo (sic) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.”

Este precepto constitucional prescribe, en lo general, la prohibición de que se reúnan dos o más poderes de los Estados de la Federación en una sola persona o corporación, es decir, obliga a los destinatarios al respeto del principio de división de poderes. En lo particular, la fracción III del mismo artículo dispone que los poderes judiciales de las entidades federativas gozarán de autonomía e independencia en cuanto a su conformación y ejercicio de sus funciones.

La violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división de poderes, pues, dada la conformación del precepto en estudio, es claro que la merma en la autonomía o en la independencia de un Poder Judicial Local es una condición necesaria y suficiente de la ruptura del principio de división de poderes.

En efecto, puede decirse que, cuando la autonomía e independencia de un poder judicial local se ven disminuidas, se ha vulnerado el principio de división de poderes, ya que aquellos principios quedan inmersos en éste. En otras palabras, no puede hablarse de una auténtica división de poderes cuando uno de ellos, en este caso el judicial, no es autónomo o independiente.

La violación a esos principios no es una cuestión que pueda analizarse con un parámetro bivalente gracias al cual pueda decirse simplemente que la violación se acreditó o no. Se trata, en todo caso, de una cuestión gradual, pues tanto la independencia como la autonomía son valores que admiten niveles de completitud y, por ende, de afectación.

En esta tesitura, conviene establecer previamente un parámetro o mecanismo de evaluación que permita analizar cada uno de los artículos tildados de inconstitucionales por el actor, a efecto de determinar en qué medida violentan la autonomía y/o la independencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y, en consecuencia, el principio de división de poderes.

No debe perderse de vista que este parámetro o mecanismo de evaluación debe ser eficiente para medir el grado de vulneración del principio de división de poderes desde la perspectiva del Poder Judicial, es decir, desde la posible afectación de la autonomía y/o la independencia judiciales.

Visto de esta manera, este Alto Tribunal considera que para construir el mecanismo aludido, es necesario en primer lugar precisar el contenido positivo del principio de división de poderes para poder después fijar sus posibles puntos de vulneración.

De acuerdo con el contenido del primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder de cada una de las entidades federativas debe estar dividido para su ejercicio entre tres poderes, de tal modo que ninguno pueda ejercer todo el poder estatal en su propio interés.

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la *ratio constitutionem* de este principio constitucional lleva al operador jurídico a considerar que en él existen implícitamente mandatos prohibitivos dirigidos a los poderes públicos de las entidades federativas, en el sentido de que no se extralimiten en el ejercicio del poder que les ha sido conferido. Ello, porque sólo a través de la modalidad deóntica de la prohibición, la cual, como se sabe, establece deberes negativos o de "no hacer", es posible limitar efectivamente el ejercicio del poder.

Sin embargo, no puede hablarse simplemente de una prohibición a secas, pues, como ya se apuntó, la autonomía y la independencia judiciales admiten grados. Así pues, este Alto Tribunal considera que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas, a fin de que respeten el principio de división de poderes; se trata de la **no intromisión**, la **no dependencia** y la **no subordinación** con respecto a los restantes.

A manera de regla, puede decirse que ninguno de los poderes públicos de los estados de la Federación podrá realizar actos que den lugar a la intromisión, a la dependencia o a la subordinación de otro poder. Para la valoración de la presente controversia, y por la importancia de los criterios identificados, conviene revisar el contenido de cada uno de ellos.

El término **intromisión** proviene del latín *intromissus*, y significa acción y efecto de entrometer o entrometerse. Se trata, pues, de la acción de inmiscuirse en una cuestión ajena. En el tema que nos ocupa, puede decirse que la intromisión es el grado más elemental de la violación al principio de división de poderes, pues para actualizarse, basta con que uno de los poderes se inmiscuya o se entremeta en una cuestión que, por ser propia de otro, le sea ajena. La intromisión, empero, no implica que el poder que se entremete en los asuntos de otro, pueda incidir de manera determinante en la toma de decisiones o que genere algún tipo de sumisión o relación jerárquica. Este primer límite del principio de división de poderes es, podría decirse, tenue, pues marca la frontera entre la violación y la no violación de tal principio. Debido a ese carácter, el juzgador constitucional debe analizar cuidadosamente, en cada caso concreto, el modo en que se lleva a cabo la relación normativa entre diversos poderes u órganos, ello con el fin de no confundir la intromisión con la colaboración en la realización de ciertas funciones normativas.

La **dependencia** (del latín *dependēre: colgar, pender*) es un estado de cosas causado indirectamente por un agente que toma la decisión de producirlo, pero que es llevado a cabo por otro agente que sólo aparentemente es el protagonista del acto. Quien está sujeto a una relación de dependencia no realiza sus acciones de manera autónoma, sino que se ve en la necesidad de atender a la voluntad del agente dominante. En la materia que nos ocupa, la dependencia conforma un segundo nivel de violación del principio de división de poderes, la cual representa un grado mayor de intromisión, puesto que implica la posibilidad de

que el poder dominante impida al poder dependiente que tome decisiones o actúe autónomamente. La dependencia es, sin embargo, una situación contingente, pues, el poder dependiente **puede** verse obligado a cumplir las condiciones que el otro le imponga, pero tiene la opción de no tomar la decisión a fin de evitar la imposición. En este sentido no necesariamente está compelido a hacer lo que el otro le imponga, puesto que existen otros cursos de acción que puede tomar distintos a la imposición.

El término **subordinación** proviene del latín *subordinatio*, *subordinatiōnis*, y significa sujeción a la orden, mando o dominio de alguien. En este contexto, se traduce en el tercer y más grave nivel de violación al principio de división de poderes. La subordinación no sólo implica que el poder subordinado no pueda tomar autónomamente sus decisiones (como en la dependencia), sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante. La diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por no tomar la decisión a fin de evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado ningún curso de acción distinto al que le prescribe.

Como puede verse, estos tres conceptos (la intromisión, la dependencia y la subordinación) son en realidad grados de uno mismo. Son conceptos concéntricos porque cada uno forma parte del siguiente, sólo que con algunas características que aumentan su grado. No obstante, estos términos no son sinónimos porque son incluyentes hacia el grado inferior, y excluyentes hacia el grado superior. En otras palabras, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y ésta, a su vez, implica intromisión (grado inferior); en cambio, la intromisión excluye a la dependencia, dado que esta última es más rica en características que la primera, y la dependencia excluye a la subordinación por la misma razón.

Por lo demás, estos conceptos han sido ya utilizados por este Alto Tribunal y pueden servir como fundamento de la presente resolución. En efecto, dichos conceptos aparecen en la tesis de jurisprudencia número P/J. 39/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, Novena Epoca, página 1377, cuyo tenor es el siguiente (se añaden énfasis):

“PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. EL HECHO DE QUE LA CONSTITUCION LOCAL NO PREVEA QUE ORGANO SERA SU REPRESENTANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES, NI VULNERA LA AUTONOMIA DE AQUEL. El principio de división de poderes, contenido en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin limitar y equilibrar el poder público en las entidades federativas, al impedir que un poder se coloque por encima de otro y que un individuo sea depositario de dos o más poderes; por otra parte, la autonomía e independencia de los poderes públicos en los Estados, implica la no intromisión, dependencia o subordinación de uno a otro, que permita que cada uno realice las funciones que tiene encomendadas con plena libertad de decisión, sin más restricciones que las que la propia Constitución o las leyes les impongan. Ahora bien, el hecho de que el texto del artículo 86 de la Constitución Política del Estado de Morelos, reformado por Decreto 1235, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 1o. de septiembre de 2000, sea omiso en establecer en quién recae la representación del Poder Judicial Local, no viola el citado principio de división de poderes, ni vulnera la autonomía del Poder Judicial Estatal, pues si bien es cierto que dicho precepto no prevé qué órgano de este poder será su representante, también lo es que no se deposita dicha facultad en un nivel de gobierno distinto del Judicial, es decir, no existe una intromisión de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado sobre la esfera de competencia del Judicial, ni dependencia o subordinación de éste respecto de aquéllos. Además, al disponer el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, que es atribución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia representar al Poder Judicial ante los otros poderes del Estado, es indudable que la representación de éstos no necesariamente debe ser regulada por la Constitución Estatal, sino que puede establecerse en una ley secundaria.”

Estas prohibiciones referidas a la no intromisión, no dependencia y no subordinación conforman, puede decirse, el aspecto estructural del principio de división de poderes. Existe también un aspecto teleológico de este principio que permite enfocar las prohibiciones referidas hacia el objetivo o finalidad del constituyente. Dicha finalidad consiste en **preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes públicos**. Lo anterior ha sido sostenido en la tesis de jurisprudencia número P/J. 112/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Novena Epoca, página 881, cuyo tenor es el siguiente:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCION LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCION FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASION DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación.”

Precisados los términos que esta Suprema Corte de Justicia ha establecido para garantizar la plena vigencia del principio de división de poderes, es preciso recordar que el artículo 116 constitucional establece una serie de contenidos tendentes a garantizar la autonomía y la independencia de los poderes judiciales locales. Es decir, ha establecido las modalidades concretas respecto de las cuales no es posible admitir intromisiones, dependencias o subordinaciones por parte de un poder público respecto de otros.

En lo que toca a la esfera reservada a los poderes judiciales de los estados -ello por tener tal carácter la parte actora en la presente controversia-, de manera específica se han previsto en la fracción III del propio artículo 116, principios que de conformidad con otro criterio jurisprudencial emitido por esta Suprema Corte de Justicia, implican la **inamovilidad, la inmutabilidad salarial (que se refiere a la remuneración adecuada y no disminuable) y la carrera judicial de los juzgadores.**

En efecto, dicho criterio puede leerse en la tesis de jurisprudencia número P/J. 101/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, Novena Epoca, página 32, que a la letra señala:

“PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. MARCO JURIDICO DE GARANTIAS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 116, FRACCION III, DE LA CONSTITUCION FEDERAL. La interpretación relacionada del texto de este precepto de la Carta Magna y el proceso legislativo que le dio origen, surgido con motivo de la preocupación latente en el pueblo mexicano del perfeccionamiento de la impartición de justicia que plasmó directamente su voluntad en la consulta popular sobre administración de justicia emprendida en el año de mil novecientos ochenta y tres y que dio lugar a la aprobación de las reformas constitucionales en la materia que, en forma integral, sentaron los principios básicos de la administración de justicia en los Estados en las reformas de mil novecientos ochenta y siete, concomitantemente con la reforma del artículo 17 de la propia Ley Fundamental, permite concluir que una justicia completa debe garantizar en todo el ámbito nacional la independencia judicial al haberse incorporado estos postulados en el último precepto constitucional citado que consagra el derecho a la jurisdicción y en el diverso artículo 116, fracción III, de la propia Constitución Federal que establece que “La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados”. Ahora bien, como formas de garantizar esta independencia judicial en la administración de justicia local, se consagran como principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas y los poderes en los que se divide el ejercicio del poder público, los siguientes: 1) La sujeción de la designación de Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales a los requisitos constitucionales que garanticen la idoneidad de las personas que se nombren, al consignarse que los nombramientos de Magistrados y Jueces deberán hacerse preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que la merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica y exigirse que los Magistrados satisfagan los requisitos que el artículo 95 constitucional prevé para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que será responsabilidad de los

órganos de gobierno que de acuerdo con la Constitución Estatal, a la que remite la Federal, participen en el proceso relativo a dicha designación; 2) La consagración de la carrera judicial al establecerse, por una parte, que las Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados y, por la otra, la preferencia para el nombramiento de Magistrados y Jueces entre las personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia, lo que será responsabilidad de los Tribunales Superiores o Supremos Tribunales de Justicia de los Estados o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, cuando se hayan establecido; 3) La seguridad económica de Jueces y Magistrados, al disponerse que percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá ser disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que se manifiesta en tres aspectos: a) La determinación en las Constituciones Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que significa que el funcionario judicial no podrá ser removido de manera arbitraria durante dicho periodo; b) La posibilidad de ratificación de los Magistrados al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución Local respectiva, siempre y cuando demuestren suficientemente poseer los atributos que se les reconocieron al haberseles designado, así como que esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto implica la necesidad de que se emitan dictámenes de evaluación de su desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificación y vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de la conclusión del periodo del ejercicio del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los Magistrados que hayan sido ratificados en sus puestos, que sólo podrán ser removidos "en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados."

Identificados tales principios, es importante considerar que la **autonomía de la gestión presupuestal** viene a ser una condición necesaria para que los poderes judiciales locales puedan ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia. Sin aquélla, se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial (entendida como remuneración adecuada y no disminuíble), el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores. Por ser una circunstancia que condiciona la independencia judicial, la autonomía de la gestión presupuestal debe sumarse a la remuneración adecuada y no disminuíble, carrera judicial e inmovilidad de los juzgadores, como principios fundamentales.

Así, si se tiene en cuenta que la autonomía de la gestión presupuestal tiene el carácter de principio fundamental de la independencia de los Poderes Judiciales locales, es claro que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello conllevaría, como ya se dijo, a la violación del principio de división de poderes que garantiza el artículo 116 constitucional.

Por lo demás, este principio de autonomía en la gestión presupuestal tiene fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en él se estatuye la garantía de expeditéz en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales; cuestiones éstas que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal. Señala el artículo 17 constitucional:

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

Nadie puede ser apisionado por deudas de carácter puramente civil".

Así pues, puede decirse que el principio de división de poderes, con especial referencia a los poderes judiciales de los estados, se viola cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) Que en cumplimiento de una norma jurídica, o bien de manera libre, se actualice una conducta imputable a alguno de los poderes legislativo o ejecutivo.
- b) Que dicha conducta implique la **intromisión**, en los términos antes definidos, de uno de esos poderes en la esfera de competencia del poder judicial, o bien, que uno de esos poderes realice actos que coloquen al poder judicial en un estado de **dependencia** o de **subordinación** con respecto a él.
- c) Que la **intromisión**, **dependencia** o **subordinación** de otro poder verse sobre cualquiera de los siguientes aspectos:
 - c.1) Nombramiento, promoción e indebida remoción de los miembros del poder judicial.
 - c.2) Inmutabilidad salarial (remuneración adecuada y no disminuable).
 - c.3) Carrera judicial.
 - c.4) Autonomía en la gestión presupuestal.

En el caso que nos ocupa, conviene establecer primeramente qué condiciones deben cumplirse para determinar si efectivamente los artículos de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes que fueron impugnados contravienen el principio de división de poderes en las condiciones apuntadas. Así las cosas, las normas impugnadas deben reputarse como inconstitucionales si, y sólo si, cumplen con cualquiera de las siguientes condiciones:

- a) Que el contenido de la norma prescriba, explícita o implícitamente, alguna obligación, prohibición o facultad que implique la **intromisión**, la **dependencia** o la **subordinación** del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes con relación a los poderes Ejecutivo o Legislativo de dicha entidad federativa.
- b) Que la **toma de decisiones** a propósito de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza, del Poder Judicial del Estado, **no corresponda en última instancia a dicho poder**.
- c) Que la ley vaya en contra de la finalidad del principio de división de poderes, es decir, que con la aplicación de aquella **no se preserve la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno los poderes públicos**.

NOVENO. Una vez establecido el criterio con el cual pueda determinarse si los artículos impugnados de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes violan o no el principio de división de poderes, resulta necesario, por cuestión de orden, realizar una clasificación de dichos artículos en función de sus características.

En el presente considerando se analizarán, en un primer grupo, aquellos artículos que se ubiquen en el supuesto de los artículos 4o. y 5o. de la Ley en cuestión, toda vez que en ellos se establece una cláusula interpretativa, según la cual, el aplicador de la ley debe realizar una homologación entre los órganos previstos por ésta y aquellos que serían sus equivalentes al interior del Poder Judicial del Estado. En el considerando décimo se analizarán aquellos artículos impugnados que no sean susceptibles de homologación.

Así pues, se procede a analizar el contenido de los artículos 4o. y 5o. de la Ley en cuestión, toda vez que en ellos se establece la cláusula interpretativa que ordena la homologación antes señalada...

El artículo 4o. de la Ley impugnada señala:

"ARTICULO 4o. La aplicación de esta ley queda a cargo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración, y de los Ayuntamientos a través de su Secretaría de Administración, Dirección Administrativa o su similar, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras dependencias o entidades del Ejecutivo Estatal o de las Administraciones Públicas Municipales, conforme a sus atribuciones enmarcadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y en los Bandos y Reglamentos Municipales o cualquiera otra disposición legal.

Asimismo, al Comité de Administración del Congreso del Estado y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el ámbito de su competencia. Cuando esta ley haga referencia al titular del Poder Ejecutivo, se entenderá también a estos órganos según sea el caso."

Como puede apreciarse, la última parte del artículo dispone que cuando se haga referencia a los sujetos de la ley diversos al titular del Ejecutivo estatal, entre los que se encuentra el representante del Poder Judicial, ha de tenerse en cuenta la homologación correspondiente. Esta provisión legislativa, interpretada a la luz del resto de los artículos de la Ley, obliga a dar un tratamiento distinto a aquellos artículos que caigan en el supuesto de la homologación con respecto del resto, pues antes de analizar la constitucionalidad de todos ellos, debe precisarse con todo rigor su alcance efectivo, a fin de descartar la posibilidad de que los problemas que surjan del análisis no atañan al ámbito constitucional.

El artículo 5o. establece las condiciones de la homologación al señalar, en sus fracciones II, IV, V, VI y VII, lo siguiente:

“ARTICULO 5o. Para los fines de esta ley se entiende por:

(...)

II. Dependencias: Las unidades administrativas que integran el Poder Ejecutivo Estatal, el Poder legislativo y Poder Judicial así como las que integran la Administración Pública centralizada de los Municipios del Estado.

(...)

IV. Secretaría: la Secretaría de Administración en lo relativo a los bienes del Estado, así como las Secretarías de Administración o Direcciones de Administración Municipales, Direcciones Administrativas de las Dependencias y Entidades, o sus similares, según sea el caso. Y en los poderes Legislativo y Judicial quien ejerza las atribuciones de administración de acuerdo con las disposiciones legales respectivas.

V. Contraloría: la Contraloría General del Estado y las Contralorías Municipales, o los órganos de control según sea el caso.

VI. Secretaría de Finanzas: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la de los Municipios, las Tesorerías o sus equivalentes.

VII. Comité: El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado, Comités Municipales o Comités de las Dependencias y Entidades, según sea el caso.

(...)”

Atendiendo a los contenidos normativos antes transcritos, se considera que del total de los artículos impugnados, el 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 36, 37, 38 (con la excepción de su fracción III), 42, 107 y 121, ameritan el estudio antes referido, dado que sólo respecto de ellos puede darse una conexión con los artículos 4o. y 5o. de la Ley impugnada que prescriben la homologación de los órganos antes referidos.

Los artículos 2o. y 3o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes señalan a la letra:

“ARTICULO 2o. El patrimonio estatal y municipal respectivamente es la parte de la hacienda pública compuesta por el conjunto de bienes, derechos e inversiones que de forma directa o indirecta son utilizados para la realización de sus objetivos y finalidades.”

“ARTICULO 3o. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los Ayuntamientos de los Municipios, la administración del patrimonio del Estado y de los Municipios en el ámbito de su competencia, así como elaborar y mantener un programa de aprovechamiento de los bienes que tengan a su cargo.

Para ello se auxiliarán de las dependencias y unidades administrativas que sean necesarias a quienes podrán delegar sus facultades con excepción de las siguientes:

I. Declarar que un bien mueble o inmueble forma parte del dominio público; y

II. Desincorporar del dominio público algún bien que hubiera dejado de prestar su fin de uso público, y pasarlo al dominio privado.”

Del análisis de estos preceptos, surge la necesidad de analizar, en el marco de la Ley impugnada, si el concepto de “patrimonio estatal” señalado en el artículo 2o., incluye al patrimonio del Poder Judicial, ya que de ser así, el facultado para administrar este último, de conformidad con el artículo 3o., sería el Gobernador del Estado y, por ende, los artículos serían violatorios del principio de división de poderes, pues, desde luego se actualizaría una indebida dependencia.

Para determinar lo anterior, es menester tener en cuenta lo previsto en el 4o. de la Ley impugnada, que dispone:

“ARTICULO 4o. La aplicación de esta ley queda a cargo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración, y de los Ayuntamientos a través de su Secretaría de Administración, Dirección Administrativa o su similar, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras dependencias o entidades del Ejecutivo Estatal o de las Administraciones Públicas Municipales, conforme a sus atribuciones enmarcadas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y en los Bandos y Reglamentos Municipales o cualquiera otra disposición legal.

Asimismo, al Comité de Administración del Congreso del Estado y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el ámbito de su competencia. Cuando esta ley haga referencia al titular del Poder Ejecutivo, se entenderá también a estos órganos según sea el caso.”

Haciendo una interpretación funcional de los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, puede decirse que cuando ésta se refiere en su artículo 3o. a **la administración del patrimonio**, debe entenderse que lo hace en el ámbito de competencia de cada uno de los sujetos de la ley. De este modo, en el caso del Poder Judicial local, la administración de su patrimonio corresponde al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, máxime que el artículo 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, así lo establece:

“ARTICULO 11. Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

(...)

II. Tener a su cargo la parte administrativa del Tribunal, que podrá delegar en el Consejo de la Judicatura Estatal;

(...)”

En lo tocante al artículo 5o., fracción II, de la Ley impugnada, el mismo señala:

“ARTICULO 5o. Para los fines de esta ley se entiende por:

(...)

II. Dependencias: Las unidades administrativas que integran el Poder Ejecutivo Estatal, el Poder Legislativo y Poder Judicial, así como las que integran la Administración Pública centralizada de los Municipios del Estado.

(...)”

Este artículo contiene una serie de reglas definitorias -entre ellas, la señalada en esta fracción II- que cumplen la función de indicar cómo deben entenderse ciertos conceptos empleados en la Ley para que ésta pueda cumplirse de acuerdo con sus fines. Sin embargo, no realiza una función prescriptiva en sentido estricto; es decir, no impone una genuina obligación a los destinatarios de la norma.

Ciertamente, la redacción del artículo arroja serias ambigüedades, ya que, por un lado, permite entender que las dependencias son las unidades administrativas que integran a los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente y, por otro lado, que el propio Poder Judicial local es una dependencia.

Sin embargo, es claro que, de acuerdo a la interpretación teleológica del precepto, y de acuerdo con la naturaleza definitoria del mismo, la norma no se dirige a establecer a ningún destinatario obligaciones, prohibiciones o facultades que impliquen la intromisión, la dependencia o la subordinación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Por su parte, el artículo 8o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes señala:

“ARTICULO 8o. Para satisfacer los requerimientos de inmuebles que planteen las dependencias, la Contraloría deberá:

I. Calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y a su localización;

II. Revisar el inventario y catálogo de la propiedad patrimonial estatal o municipal, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la necesidad de adquirir otros;

III. Asignar en su caso a las dependencias y entidades interesadas, los inmuebles disponibles; y

IV. De no ser posible lo anterior, solicitar al Comité la Adquisición del inmueble con cargo a la partida presupuestal autorizada de la dependencia o entidad interesada y realizar las gestiones necesarias para la firma, registro y archivo de la escritura de propiedad correspondiente.

La autorización de adquisición de inmuebles, se hará siempre y cuando exista autorización del Titular del Poder Ejecutivo del Estado o del Ayuntamiento respectivo, corresponda a los programas anuales aprobados, exista autorización de inversión en su caso, y no se disponga de inmuebles estatales o municipales adecuados para satisfacer los requerimientos específicos.

No se aplicarán las disposiciones de esta ley a las adquisiciones de inmuebles para la ejecución de obra pública.”

El artículo anterior, referido a las atribuciones de “la Contraloría”, debe ser interpretado a la luz de la fracción V del artículo 4o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, según la cual por “Contraloría” debe entenderse la Contraloría General del Estado y las Contralorías Municipales, **o los órganos de control según sea el caso**. Con respecto al Poder Judicial local, es el caso que la “Contraloría” de la que habla la Ley es homologable a la **Contraloría Interna** del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes prevista en los artículos 1o. y 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad federativa, mismos que se citan a continuación:

“ARTICULO 1o. El Poder Judicial del Estado se integra por el Supremo Tribunal de Justicia, el Tribunal Electoral, el Tribunal del lo Contencioso Administrativo, Juzgados de Primera Instancia Civiles y Penales, Mixtos de Primera Instancia, Familiares y Mixtos Menores, el Consejo de la Judicatura Estatal, el Instituto de Capacitación y la Contraloría Interna.”

“ARTICULO 99. El Poder Judicial del Estado contará con una Contraloría Interna, misma que se conformará y regirá de acuerdo con esta Ley y su Reglamento.”

Así las cosas, al existir la posibilidad normativa de sustituir el término “Contraloría”, por el de “Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado”, se concluye que el artículo 8o. de la Ley impugnada no contraviene el principio de división de poderes, puesto que las medidas de control que previene quedan todas en el ámbito de competencia del Poder Judicial local.

El siguiente artículo impugnado, el artículo 36, prescribe:

“ARTICULO 36. La programación de las adquisiciones, no deberá rebasar un ejercicio presupuestal, salvo que se cuente con autorización de la Secretaría de Finanzas del Estado, la de los Municipios o su equivalente, según sea el caso, y con la del Congreso del Estado en los Términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado.”

Según este artículo, cuando el Poder Judicial del Estado rebase, con la programación de las adquisiciones, el ejercicio presupuestal, deberá contar con la autorización del **órgano equivalente** a la Secretaría de Finanzas del Estado. De conformidad con el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, corresponde al Presidente del Supremo Tribunal del Justicia del Estado **la autorización** de las erogaciones del presupuesto:

“ARTICULO 11. Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

(...)

IX. Autorizar las erogaciones del presupuesto anual del Poder Judicial y llevar el control de su ejercicio;

De este modo, se concluye que el artículo en mención no resulta violatorio del principio de división de poderes, porque las autorizaciones que señala el artículo 36 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes pueden realizarse sin que exista intromisión, dependencia o subordinación por parte de los otros poderes del Estado.

Por otro lado, el artículo 37 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes señala:

“ARTICULO 37. Los sujetos de la Ley, deberán integrar su propio Comité de Adquisiciones y Enajenaciones como órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, orientación, en materia de adquisiciones y enajenaciones, cuyo objetivo es intervenir como instancia administrativa en los procedimientos de las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles requeridos por sus dependencias de la administración pública estatal, cuando el valor de las adquisiciones o enajenaciones corresponda al procedimiento de licitación pública o invitación restringida.

El domicilio del Comité será el mismo en el que se encuentre ubicada la oficina sede de la Secretaría.”

Uno de los sujetos de la Ley en cuestión es el Poder Judicial del Estado. La norma que acaba de citarse impone a dicho órgano la obligación de formar un Comité de Adquisiciones y Enajenaciones que fungirá como instancia administrativa en materia de adquisiciones y enajenaciones, en aquellos casos en los que se haga necesaria una licitación pública o una invitación restringida. Dicha obligación, por sí misma, no implica intervención alguna en la esfera competencial del Poder Judicial, pues éste podría ejercer autónomamente su presupuesto utilizando para ello una modalidad impuesta en la Ley. Ejercer el presupuesto a través del comité establecido en una norma general, se refiere a las formas de ejercicio propias de las atribuciones conferidas, y no a la intromisión de un órgano o poder ajeno al Poder Judicial. Por ello, lo dispuesto en este precepto en nada afecta a la autonomía e independencia del sujeto de la ley, ya que materialmente éste puede tomar decisiones de manera libre, sin que ello implique intromisión, dependencia o subordinación. La autonomía de un poder público no implica su exclusión del sistema jurídico vigente, ni menos el establecimiento de reglas específicas propias.

Ahora bien, la conformación del referido comité está regulada en el artículo 38 de la Ley que se analiza, cuyo texto es el siguiente:

“ARTICULO 38. El Comité contará con los siguientes integrantes:

I. Un Presidente, que será el Titular de la Secretaría;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será la entidad responsable de llevar a cabo las adquisiciones a favor de los sujetos de la ley;

III. Tres vocales con voz y voto que serán:

Un representante del Comité de Planeación del Estado de Aguascalientes; un representante de la Secretaría de Finanzas o su similar en sus Municipios; y un representante de la Cámara o Asociación del ramo correspondiente;

IV. Dos vocales con voz pero sin voto que serán:

Un representante de la Contraloría General del Estado o el órgano de control interno según sea el caso en los Municipios; y

V. Un representante del área requisitante.

Los integrantes del Comité contarán con un suplente, el cual, en ausencia del titular, tendrá las mismas facultades y atribuciones de este último.

En el caso de los Municipios se invitará como vocales al Síndico y al Regidor de Hacienda, con voz y voto.”

Salvo los órganos establecidos en la fracción III, que será analizada más adelante, los demás órganos señalados en el presente artículo, encuentran homologación en el ámbito del Poder Judicial del Estado. En efecto, haciendo la interpretación correspondiente, la **fracción I** del artículo impugnado, se refiere al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con la fracción IV del artículo 5o. de la Ley impugnada, en relación con el artículo 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que señala:

“ARTICULO 11. Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

(...)

II. Tener a su cargo la parte administrativa del Tribunal, que podrá delegar en el Consejo de la Judicatura Estatal;

(...)”

Por otra parte, la **fracción II** del artículo 38 de la Ley impugnada, se refiere al Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con los artículos 21, 25, fracción II, en relación con el artículo 11, fracción IX, de la misma Ley Orgánica, ya que a él le corresponde hacer las adquisiciones que se requieran. Dicen tales artículos:

“ARTICULO 21. En el Supremo Tribunal de Justicia habrá cuando menos un Secretario, un Oficial Mayor, un Notificador, un Archivista y los demás servidores que establezca el presupuesto.”

“ARTICULO 25. El Oficial Mayor tendrá las siguientes obligaciones:

(...)

II. Hacer las adquisiciones que se les autoricen y controlar su almacén, para lo cual deberá:

(...)”

“ARTICULO 11. Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

(...)

IX. Autorizar las erogaciones del presupuesto anual del Poder Judicial y llevar el control de su ejercicio;

(...)”

Finalmente, la **fracción IV** del artículo 38 impugnado, se refiere al Contralor Interno del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con los artículos 1o. y 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, citados en supralíneas.

Como puede verse, es posible que el Comité de Adquisiciones previsto en el artículo 38 de la Ley impugnada, llegue a conformarse dentro del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes con funcionarios adscritos al mismo, con la salvedad de la calidad de los vocales previstos en la fracción III. Así las cosas, el referido comité quedaría conformado dentro de la esfera competencial de dicho poder, con lo cual en modo alguno se estaría violentando el principio de división de poderes.

Pasando al siguiente artículo impugnado, el 42, en él se establecen las facultades del Comité de Adquisiciones previsto en el artículo 37 antes analizado, señalando lo siguiente:

“ARTICULO 42. El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Llevar a cabo las licitaciones públicas, adjudicando, en los términos de esta Ley, los contratos y pedidos respectivos;

II. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de operación que establezca la Secretaría; y vigilar que la información se procese de preferencia en sistemas computarizados;

III. Aprobar los casos de cancelación de pedidos, rescisión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor; el pago de indemnizaciones a los proveedores que en su caso se consideren procedentes, previo dictamen emitido por este órgano, y aprobar las sanciones que correspondan a los proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de pedidos o contratos;

IV. Determinar cuáles y cuántos serán los bienes y servicios a adquirir;

V. Solicitar a las dependencias y entidades su programa anual de adquisiciones;

VI. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente bienes y servicios, en casos de fuerza mayor;

VII. Nombrar a los servidores públicos encargados de recibir ofertas, garantías, poderes, y demás análogas, esto es, las personas encargadas de organizar y coordinar todas las actividades y actos de una licitación e invitación restringida;

VIII. Rechazar de manera fundada y motivada las requisiciones de compra que a su juicio no se justifiquen;

- IX. Emitir su resolución respecto de las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega, ofertadas por los proveedores para la adquisición, enajenación o arrendamiento de bienes y servicios;*
- X. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las tareas de mantenimiento y servicio;*
- XI. Fomentar la incorporación de más personas al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado que reúnan los requisitos para su registro;*
- XII. Proponer a la Secretaría la exclusión del Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado a los proveedores que hubiesen incurrido en incumplimiento de adjudicación o contrato, aun en un solo pedido;*
- XIII. Proponer a la Secretaría, los criterios para la elaboración de los Manuales de Adquisiciones y el de Enajenaciones, así como su permanente actualización;*
- XIV. Analizar y aprobar mediante dictamen la factibilidad para la instauración de Subcomités en Dependencias adscritas al Ejecutivo;*
- XV. Establecer políticas y lineamientos para los Subcomités;*
- XVI. Intervenir en representación del Gobierno del Estado en las operaciones de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado;*
- XVII. Formular las normas, políticas y lineamientos en materia de enajenaciones de los bienes muebles e inmuebles;*
- XVIII. Hacer públicas, en uno de los diarios de mayor circulación, las convocatorias de cada licitación para la enajenación de bienes; y*
- XIX. Las demás que le sean conferidas en esta ley.”*

Las facultades previstas en el citado artículo se refieren al Comité de Adquisiciones que el propio Poder Judicial local habrá de establecer en uso de sus propias atribuciones, de ahí que no pueda concluirse que esta norma establezca alguna prescripción que pudiera implicar la invasión de esferas.

Por su parte, el artículo 107 de la Ley impugnada señala:

“ARTICULO 107. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier momento, que los procedimientos de adquisición y enajenación se realicen conforme a lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables y a los programas y presupuestos autorizados.

La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a la Secretaría, a las dependencias y a las entidades, e igualmente podrá previa fundamentación y motivación solicitar de los servidores públicos y de los proveedores que participen en las adquisiciones y enajenaciones, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.”

Nuevamente, si se realiza una interpretación funcional, y si se toma en cuenta la homologación prevista en los artículos 4o. y 5o. de la Ley impugnada, puede decirse que cuando se trate del Poder Judicial, el artículo que acaba de citarse se refiere a la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Esa Contraloría Interna está regulada por los artículos 1o. y 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, los cuales fueron citados con anterioridad. En esa tesitura, puede concluirse que cuando se aplique el artículo 107 de la ley impugnada al Poder Judicial local, las funciones de control y fiscalización previstas en ese numeral corresponden a un órgano que queda comprendido dentro de la esfera de competencia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. En estas condiciones, es inconcuso que el artículo en mención en modo alguno conculca el principio de división de poderes.

Finalmente, el artículo 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes establece:

“ARTICULO 121. En contra de las resoluciones que dicten la Secretaría, la Contraloría y los Comités, se podrá interponer recursos de revisión en los términos y con los requisitos que establece la ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, mismo que se tramitará y resolverá por la propia autoridad de la que se reclame el acto, conforme a lo dispuesto en la citada ley.”

El contenido de este artículo, interpretado a la luz del artículo 5o. de la propia Ley, permite homologar los órganos que menciona, con los propios del Poder Judicial del Estado, quedando en el ámbito de la competencia de éste el trámite y la resolución de los recursos a los que hace referencia esta norma.

En efecto, cuando la Ley habla de la "Secretaría", debe entenderse que se refiere al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de conformidad con la fracción IV del mencionado artículo 5o., en relación con el artículo 11, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; por "Contraloría", debe entenderse la Contraloría Interna del Poder Judicial del Estado prevista en los artículos 1o. y 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad; finalmente, por lo que hace al "Comité", ya se señaló que la obligación de constituirlo, no vulnera el principio de división de poderes, pues bien podría conformarse con funcionarios adscritos al propio Poder Judicial local.

Ahora bien, tomando en cuenta los argumentos manifestados con anterioridad, así como las condiciones necesarias para determinar si se actualiza la violación al principio de división de poderes que se señalaron en el criterio establecido en el considerando que antecede, se concluye que los artículos 2o., 3o., 8o., 36, 37, 38, fracciones I, II y IV, 42, 107 y 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes no son inconstitucionales.

Lo anterior es así, porque tales preceptos no prescriben, ni explícita ni implícitamente, alguna obligación, prohibición o facultad que implique la **intromisión**, la **dependencia** o la **subordinación** del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes con relación a los poderes Ejecutivo o Legislativo de dicha entidad federativa.

Tampoco disponen en modo alguno que **la toma de decisiones**, con respecto a los fines de la ley, no corresponda en última instancia al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Finalmente, no violentan el espíritu de dicho principio, es decir, **no alteran en modo alguno la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes públicos.**

DECIMO. Los artículos 1o., fracción IV (esta fracción es la que se refiere al Poder Judicial local), 11, párrafo segundo, 38, fracción III, y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, merecen un análisis diverso, en tanto que entre éstos y los artículos 4o. y 5o. de la propia Ley, no puede establecerse conexión alguna que amerite un análisis interpretativo, como el realizado en el considerando anterior.

El artículo 1o., fracción IV, de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, dispone:

"ARTICULO 1o. La presente ley es de orden público e interés social, tiene por objeto regular las acciones relativas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza que realicen:

(...)

IV. Los Poderes Legislativo y Judicial."

Del análisis del precepto citado se desprende que el hecho de que la Ley impugnada regule las acciones relativas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza que realice el Poder Judicial de la entidad, no constituye, en sí mismo, una afectación al principio de división de poderes, dado que sólo fija el marco jurídico con base en el cual deben realizar esas acciones, y tiene como fin, entre otros, proteger el patrimonio estatal y municipal, evitando el desvío de recursos o corrupción en la realización de los contratos que regula, así como el de llevar un pleno control sobre los bienes, derechos, obligaciones y cargas del Estado en esta materia. Lo anterior, queda corroborado en la exposición de motivos de la norma impugnada, formulada por la Comisión Legislativa y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Aguascalientes, que en su parte conducente dice:

"Queremos señalar, que con esta ley, se establecen las normas generales para que el gobierno estatal, los municipios, las entidades paraestatales y paramunicipales, cuiden de la mejor manera el patrimonio del cual se les ha dotado y se les sigue dotando con las aportaciones que los mismos ciudadanos erogan año con año a las arcas públicas, dándole mayor transparencia, legalidad y honestidad al manejo del gasto público en esta materia. Los beneficios que traerá esta ley son:

<Proteger el patrimonio estatal y municipal.

<Establecer un marco jurídico claro y transparente en los contratos en que el gobierno es parte.

<Da seguridad jurídica a los proveedores y trato igual a los proveedores.

<Permite tener control y vigilancia en los bienes del Estado, al establecer sanciones para quienes no cumplan con la ley y procedimientos en todos estos actos.

<Evita el desvío de recursos o corrupción en la realización de estos contratos.

<Busca agilidad y utilización de tecnología.

(...)"

De este modo, se llega a la conclusión de que el artículo 1o. de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes no es violatorio del principio de división de poderes, en tanto que no prescribe ninguna obligación, prohibición o facultad, que implique la intromisión, la dependencia o la subordinación del Poder Judicial del Estado con relación a los poderes Ejecutivo o Legislativo de dicha entidad federativa.

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley impugnada señala:

"ARTICULO 11. La Secretaría sólo podrá determinar el arrendamiento de bienes inmuebles para el servicio de la Administración Pública Estatal o Municipal respectivamente, cuando no sea posible o conveniente su adquisición. La propia Secretaría, deberá resolver tal conveniencia, considerando para ello lo que las dependencias destinatarias argumenten y acrediten para tales supuestos, previa intervención de la Secretaría de Finanzas.

Tanto la adquisición como el arrendamiento de inmuebles para oficinas públicas, requerirán de estudios, proyectos o programas previos, en los que participen las Secretarías de Administración, Desarrollo Social y Secretaría de Finanzas, independientemente de la competencia o intervención que les corresponda a otras dependencias.

Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles, deberán realizar los estudios de costo beneficio, considerando, la posible adquisición mediante arrendamiento con opción a compra.

Para determinar el monto total por concepto de contratación de servicios, deberán considerarse las erogaciones en forma anualizada."

En primer lugar, cabe señalar que el párrafo segundo del artículo citado no establece expresamente un criterio de cuantificación, es decir, no emplea una proposición que diga "toda adquisición..."; sin embargo, la frase en su conjunto no puede ser entendida de otro modo que no sea vinculada a un criterio de cuantificación universal, pues no se puede estar refiriendo a "algunas adquisiciones o algunos arrendamientos", sino al universo de ellos que se da conforme a los alcances de esta Ley.

En segundo lugar, tomando en cuenta que el párrafo segundo se refiere a todas las adquisiciones, es claro que prescribe de manera expresa que cuando los sujetos de la ley -entre ellos el Poder Judicial local- adquieran o arrienden inmuebles para oficinas públicas, deberán realizar estudios, proyectos o programas previos, en los que **participen** las Secretarías de Administración, Desarrollo Social y Finanzas del Estado de Aguascalientes, dependencias éstas del Ejecutivo Estatal. Esta participación es ineludible, pues al final del párrafo segundo se establece con toda claridad que dicha participación debe realizarse "...independientemente de la competencia o intervención que les corresponda a otras dependencias".

Esta prescripción implica, necesariamente, una **intromisión**, es decir, el grado más elemental de violación al principio de división de poderes establecido por esta Suprema Corte. En este caso, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes está obligado por ley a permitir que tres dependencias del Ejecutivo del Estado intervengan en la adquisición o arrendamiento de bienes inmuebles, a saber, las Secretarías de Administración, Desarrollo Social y Finanzas. Como consecuencia de lo anterior, se estaría vulnerando la autonomía en la gestión presupuestal y, por ende, la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la entidad, pues la adquisición y el arrendamiento de inmuebles que realizara dicho poder, serían actividades en las que no podría eludirse la participación del Ejecutivo del Estado.

Se insiste, se trata de una **intromisión**, es decir, de una acción que implica que ciertos órganos del Poder Ejecutivo del Estado se inmiscuyan en una cuestión ajena a ellos. En el caso concreto de este artículo, la intromisión prescrita no implica que el Ejecutivo esté en posibilidades de incidir de manera determinante en la toma de decisiones del Poder Judicial. No debe pasarse por alto que, según se precisó en el considerando octavo de la presente resolución, la **intromisión** excluye a la **dependencia**, dado que esta última es más rica en características aquélla. Para que hubiera dependencia sería menester que las Secretarías de Administración, Desarrollo Social y Finanzas del Ejecutivo estatal **podieran incidir de manera determinante** en cuanto a la decisión que pudiera tomar la "Secretaría" (es decir, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes) en materia de arrendamiento de bienes inmuebles (para el poder judicial local) cuando no sea posible o conveniente su adquisición.

En efecto, partiendo del supuesto de que los destinatarios del artículo 11 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes lo obedecieran en sus términos, y que el artículo fuera aplicado al Poder Judicial local, la interpretación del mismo sería la siguiente: quien toma la determinación de arrendar un inmueble en lugar de adquirirlo es la "Secretaría", es decir, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y no las Secretarías de Administración, Desarrollo Social y Finanzas del Ejecutivo estatal, ya que cuando el artículo se refiere a ellas, lo hace obligándolas a intervenir en la decisión, pero no las faculta para intervenir en la toma de la decisión correspondiente.

A continuación se procede al análisis del artículo 38, fracción III, de la Ley impugnada, el cual señala a la letra:

"ARTICULO 38. El Comité contará con los siguientes integrantes:

(...)

III. Tres vocales con voz y voto que serán:

Un representante del Comité de Planeación del Estado de Aguascalientes; un representante de la Secretaría de Finanzas o su similar en sus Municipios; y un representante de la Cámara o Asociación del ramo correspondiente;

(...)"

Habiendo hecho la homologación a la que se refieren los artículos 4o. y 5o. de la Ley impugnada, y habiendo analizado la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, así como la Constitución de esa entidad federativa, se tiene que el Poder Judicial no cuenta con algún órgano colegiado que haga las veces de "**Comité de Planeación del Estado de Aguascalientes**", pues, como se indicó líneas arriba, según el artículo 25, fracción II, en relación con el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde al Oficial Mayor, previa autorización del Presidente del Supremo Tribunal del Estado, hacer las adquisiciones que se requieran. Asimismo, la mencionada legislación no previene la existencia de un "**representante de la Cámara o Asociación del ramo correspondiente**".

Lo anterior significa que la Ley impugnada impone al Poder Judicial del Estado obligaciones que no puede cumplir, pues no podría formar, conforme a la Ley, el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones que está prescrito en el artículo 37 de la Ley impugnada. De este modo, la Ley mencionada coloca al Poder Judicial en la paradoja de cumplir con una obligación de imposible cumplimiento. Esto, por sí mismo, no constituye una invasión de esferas, pero si se tiene en cuenta que la Ley impugnada impone al Poder Judicial local obligaciones que sólo pueden ser cumplidas contando con facultades legales que son reservadas al Ejecutivo del Estado, podría llegarse al extremo de que el Poder Judicial se viera en la necesidad de nombrar funcionarios que, según la Ley en cuestión, tendrían ciertas facultades que nada tienen que ver con las conferidas expresamente tanto por la Constitución Federal, como por la Local, al Poder Judicial del Estado. De este modo, la ley estaría obligando al Poder Judicial a realizar actos que saldrían del ámbito de su competencia contraviéndose, en consecuencia, la finalidad o el espíritu del principio de división de poderes, esto es, **no se estaría preservando la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor del Poder Judicial local.**

Conviene señalar que lo que resulta inconstitucional es la calidad de los tres vocales del Comité de Adquisiciones, señalado en el artículo 38 de la Ley impugnada, no así el diseño mismo del comité integrado con vocales con voz y voto. No está demás decir que, en la especie, esos vocales deberían ser funcionarios adscritos al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Por lo que hace al artículo 47 de la Ley impugnada, éste señala:

“ARTICULO 47. La Secretaría de Administración de Gobierno del Estado integrará y operará el Padrón de Proveedores que tendrá por objeto el registro de las personas físicas o morales que deseen enajenar mercancías, materias primas, bienes o prestar servicios a los sujetos de la Ley, quienes podrán solicitar a la misma la incorporación al padrón de determinado proveedor que satisfaga los requisitos necesarios.

El padrón proporcionará a los sujetos de la Ley, la información completa, confiable y oportuna sobre las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios en las mejores condiciones y con la mejor calidad.”

Este artículo dispone la integración de un padrón de proveedores que, de conformidad con los fines y la estructura de la Ley, es único para todos los destinatarios. De manera explícita prescribe que la **integración** y la **operación** del padrón es una facultad de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, lo cual significa que el padrón que, en su caso, debería emplear el Poder Judicial local, sería de exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado.

En esta tesis, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes no podría contar autónomamente con su propio padrón de proveedores, sino que se vería en la necesidad de utilizar el único padrón establecido en la Ley, el cual, en sentido estricto, no se ubica en su esfera de competencia.

De este modo, se viola el principio de división de poderes en la vertiente que se ha definido como intromisión, pues el artículo en mención prescribe la participación e intervención del Poder Ejecutivo del Estado en la esfera competencial del Poder Judicial local al operar e integrar el padrón de proveedores. Aun cuando no es determinante en la toma de decisiones, ni genera algún grado de dependencia, sumisión o verticalidad, la integración y operación del padrón único a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, implica un mínimo grado de intervención, suficiente, a juicio de este Alto Tribunal, para considerar violado el principio de división de poderes.

DECIMO PRIMERO. Por las razones expuestas en los considerandos anteriores, se concluye que los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 36, 37, 38, fracciones I, II, IV y V, 42, 107 y 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, no violan el principio de división de poderes consagrado en el artículo 116, fracción III, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede reconocer su validez.

Por el contrario, los artículos 11, párrafo segundo y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, resultan conculcatorios del mencionado principio, en virtud de que prescriben, respectivamente, la **participación** de diversas secretarías, dependientes del Ejecutivo local, en la adquisiciones y arrendamientos que realice el Poder Judicial local; y la **operación e integración** del padrón de proveedores que ha de utilizar el Poder Judicial de la entidad, a cargo de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado. Con lo anterior, el principio de división de poderes queda violentado en el nivel de intromisión; por ende, debe declararse la invalidez de dichos artículos.

Asimismo, el artículo 38, fracción III de la Ley impugnada, violan el mismo principio, por atentar contra la finalidad del mismo, al imponer al Poder Judicial local obligaciones que sólo pueden ser cumplidas contando con facultades legales que son reservadas al Ejecutivo del Estado, con lo cual no se estaría preservando la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor del Poder Judicial local, por lo que procede declarar su invalidez.

DECIMO SEGUNDO. Los efectos de la invalidez de una norma general, como en el caso concreto, deberán extenderse por vía de consecuencia, a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de la materia, cuyo tenor es el siguiente:

“ARTICULO 41. Las sentencias deberán contener:

(...)

IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.

(...)”

En tal virtud, este Alto Tribunal procedió al estudio del alcance de los efectos de la invalidez de los artículos 11, párrafo segundo, 38, fracción III, y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes que fueron declarados inconstitucionales, habiendo concluido que la invalidez del artículo 47 señalado se extiende a los artículos 28, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 61, párrafo segundo, y quinto transitorio de la misma Ley, en virtud de que su validez depende de la de aquél.

En efecto, los artículos mencionados disponen:

“ARTICULO 28. La Secretaría podrá eximir de la obligación de estar inscritos en el padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal a las personas físicas y morales que provean artículos perecederos, en los casos a que se refiere la Fracción III del Artículo 57 del presente ordenamiento.”

“ARTICULO 48. Para ser inscrito en el padrón, los interesados deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud en el formato que apruebe la Secretaría;

II. Las personas morales deberán acompañar copia certificada de su acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como acreditar la personalidad de su representante legal;

III. Manifestar mediante la exhibición de los documentos públicos, que es productor, prestador de servicios o comerciante legalmente establecido;

IV. Demostrar su solvencia económica y capacidad para la producción o suministro de mercancías, materias primas o bienes muebles y en su caso para el arrendamiento de éstos o la prestación de servicios; y

V. Proporcionar la información complementaria que solicite la Secretaría, en términos de la normatividad vigente.”

“ARTICULO 49. La Secretaría, dentro de un término que no excederá de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción o modificación en el padrón.

En caso de negativa, ésta se comunicará por escrito fundando y motivando las razones de la misma.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Secretaría requerirá al solicitante para que en un término de cinco días hábiles posteriores a su recepción, la aclare o complete, caso contrario se le tendrá por no presentada la solicitud.

Si transcurrido el término que se señala en el párrafo primero de este artículo, la Secretaría no resuelve sobre la aceptación o negativa del registro, sin más trámite deberá otorgarse dicho registro o modificación.”

“ARTICULO 50. El registro en el padrón de proveedores tendrá vigencia desde su fecha de expedición hasta que concluya el año fiscal en el que se efectúe; los proveedores que deseen continuar inscritos, deberán solicitar su refrendo durante el mes de enero y febrero de cada año, debiendo actualizar la información de su registro.

La falta de presentación de solicitud para obtener el refrendo o la negativa de éste, traerá como consecuencia la cancelación del registro a su vencimiento, sin necesidad de resolución expresa en tal sentido y sin perjuicio del derecho del interesado de formular nueva solicitud para obtenerlo.

El registro y el refrendo del mismo, se solicitarán en los formatos que expida la Secretaría de Finanzas y causará los derechos que establezca la ley de ingresos.”

“ARTICULO 51. Procederá la suspensión del registro hasta por el término de veinticuatro meses por parte de la Secretaría, cuando el proveedor:

I. Se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus facultades de comprobación, inspección y vigilancia;

II. No entregue los bienes materia del pedido o contrato en las condiciones pactadas; o--- III. No sostenga su propuesta económica en determinada partida de un concurso, invitación restringida o licitación, a menos que indemnice al Estado o Secretaría según lo establecido en bases.”

“ARTICULO 52. La Secretaría podrá cancelar el registro de un proveedor o negar el refrendo del mismo cuando:

I. Se compruebe que hubiere actuado con dolo o mala fe y la información proporcionada sea incompleta o inconsistente;

II. Se niegue a reponer las mercancías que no reúnan los requisitos de calidad estipulada;

III. Incumpla un pedido o contrato de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios; o

IV. Reincida en la comisión de los actos a que se refiere el artículo anterior.”

“ARTICULO 58. En todos los procedimientos de adquisición se invitará a participar a los mejores proveedores inscritos en el Padrón Estatal que por su experiencia y capacidad garanticen un excelente precio, calidad y condiciones de venta en los bienes o servicios a contratar y cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.

Los procedimientos de compra directa y concurso deberán ser normados por la Secretaría a través del Manual de Adquisiciones.

Los montos por concepto de compra directa se efectuarán hasta por un límite de tres mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado y se adjudicarán de entre los proveedores que ofrezcan las mejores condiciones económicas para el Estado.

Las adquisiciones por concurso quedarán comprendidas entre los tres mil y quince mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado en los cuales se deberán invitar con la debida oportunidad un mínimo de cinco distintos proveedores; la adjudicación se podrá decidir con un mínimo de dos propuestas, siempre y cuando la mejor oferta económica sea igual o menor a los precios de mercado estudiados por la Secretaría.”

“ARTICULO 61. Las convocatorias se publicarán en un diario de circulación local, y sólo si fuese necesario, en uno de circulación nacional.

La Secretaría procurará informar oportunamente a los proveedores del padrón sobre todos los concursos y licitaciones que se realicen; la información de las convocatorias se incluirá en los medios electrónicos de comunicación de la Secretaría.

En caso de que una determinada licitación sólo se publique en el Estado porque los bienes vayan a ser solventados con recursos estatales y dentro del mismo no existan proveedores que pudieran participar, será obligación de la Secretaría invitar formalmente con la debida oportunidad, a participar, cuando menos a tres proveedores dedicados a la venta de los bienes solicitados, de preferencia a los inscritos en el padrón; esto no implicará que si no se inscriben tres proveedores invitados no pueda llevarse a cabo la licitación, pues ésta podrá llevarse a cabo aunque sólo un proveedor participe, siempre y cuando su oferta económica sea igual o menor a los precios de mercado estudiados por la Secretaría.

La convocatoria de una licitación deberá incluir por lo menos la siguiente información:

I. El nombre, denominación o razón social de la convocante;

II. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando el documento que tenga las bases implique un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de los documentos que se entreguen. Los interesados podrán revisar tales documentos previamente al pago de dicho costo, el cual será requisito para participar en la licitación;

III. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de propuestas;

IV. La indicación del carácter nacional o internacional de la licitación;

V. *La descripción general, cantidad y unidad de medida y marca de los bienes o servicios que sean objeto de la licitación, así como la correspondiente a por lo menos cinco de las partidas o conceptos de mayor monto;*

No se podrá solicitar una sola marca en particular a excepción que se incluya la leyenda "o similar";

VI. *Lugar, plazo de entrega y condiciones, así como la información sobre los porcentajes a otorgar por conceptos de anticipos;*

VII. *En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra; y*

VIII. *La indicación de si la adjudicación será única o compartida, ya sea en forma total o parcial por cada partida".*

Como puede verse, todos estos artículos se refieren al padrón de proveedores previsto en el artículo 47 de la Ley impugnada. Dado que dicho artículo fue declarado inconstitucional por violar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, el resto de los artículos referidos quedan afectados de esa invalidez, dado que regulan de diversas maneras la forma de operar del mencionado padrón de proveedores.

Por otra parte, debe quedar precisado que con la declaración de invalidez decretada, referida a los artículos 11, párrafo segundo, 28, 38, fracción III, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 61, párrafo segundo, y quinto transitorio, de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, el Poder Judicial de esa Entidad Federativa queda excluido de la aplicación de los mencionados preceptos.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se declara la invalidez de los artículos 11, párrafo segundo, 38, fracción III, y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, única y exclusivamente por lo que se refiere al Poder Judicial de esa entidad federativa.

TERCERO. Como consecuencia de la declaración de invalidez contenida en el resolutivo que antecede, es inaplicable al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes lo dispuesto en los artículos 28, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 61, párrafo segundo, y quinto transitorio de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 36, 37, 38, fracciones I, II, IV y V, 42, 107 y 121 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintidós de junio de dos mil cuatro, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero, Silva Meza y Presidente en funciones Díaz Romero, se aprobaron los resolutivos segundo, tercero y quinto; y por mayoría de seis votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Ortiz Mayagoitia y Presidente en funciones Díaz Romero se aprobaron los resolutivos primero y cuarto; los señores Ministros Gudiño Pelayo, Sánchez Cordero y Silva Meza votaron en contra, porque se declarara fundada en su totalidad la controversia y la inaplicabilidad al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes de los preceptos a que se refiere el resolutivo tercero, y reservaron su derecho de formular voto de minoría. Fue ponente el Ministro Cossío Díaz.

No asistió el señor Ministro Presidente Mariano Azuela Güitrón, por estar realizando otras actividades inherentes a su cargo.

Firman el Presidente en Funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente y Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.- El Ministro Presidente en Funciones, **Juan Díaz Romero**.- Rúbrica.- El Ministro Ponente, **José Ramón Cossío Díaz**.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, **José Javier Aguilar Domínguez**.- Rúbrica.

VOTO DE MINORIA QUE FORMULAN LOS SEÑORES MINISTROS OLGA SANCHEZ CORDERO DE GARCIA VILLEGAS, JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO Y JUAN N. SILVA MEZA, EN CONTRA DE LA RESOLUCION PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL PLENO, EN LA CONTROVERSIDA CONSTITUCIONAL 35/2000, PROMOVIDA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

No se comparten los considerandos octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y los puntos resolutiveos de la resolución aprobada por la mayoría, en la que se determinó declarar la invalidez de los artículos 11, párrafo segundo, 38, fracción III, y 47 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes; que como consecuencia de la declaración de invalidez, es inaplicable al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes lo dispuesto en los artículos 28, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 61, párrafo segundo y quinto transitorio del mismo ordenamiento local; y por último, declarar la validez de los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., fracción II, 8o., 36, 37, 38, fracciones I, II, IV y V, 42, 107 y 121 del citado ordenamiento legal.

La litis de la controversia, en nuestra perspectiva consiste en determinar si la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes al incluir en sus supuestos al Poder Judicial Local vulnera el principio de división de poderes y por ende la autonomía e independencia del citado poder.

La resolución de la mayoría propone declarar la invalidez de algunos preceptos de la Ley impugnada y reconocer la validez de otros.

En el considerando octavo de la resolución que no se comparte se aborda el estudio de los principios de autonomía e independencia judicial, a los que se refiere el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal. Al respecto, se sostiene en esencia que:

a) De acuerdo al citado numeral constitucional la violación a los principios de autonomía e independencia judicial implica necesariamente la violación al principio de división de poderes.

b) El parámetro o mecanismo de evaluación eficiente para medir el grado de vulneración del principio de división de poderes se puede referir a tres prohibiciones dirigidas a los poderes públicos de las entidades federativas a saber: la no intromisión, la no dependencia y la no subordinación.

c) El artículo 116, fracción III, constitucional establece una serie de contenidos tendientes a garantizar la autonomía e independencia del Poder Judicial local, los que consisten en: la inmovilidad, la inmutabilidad salarial y la carrera judicial de los juzgadores. Además se señala a la autonomía de gestión presupuestal como condición necesaria para que el Poder Judicial local pueda ejercer sus funciones jurisdiccionales con plena independencia.

d) Las normas impugnadas deben reputarse como inconstitucionales si se cumplen las siguientes condiciones: **1)** que el contenido de la norma prescriba, explícita o implícitamente, alguna obligación, prohibición o facultad que implique la intromisión, la dependencia o la subordinación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes con relación a los poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha entidad federativa; **2)** que la toma de decisiones a propósito de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, control, arrendamiento, registro, enajenación del patrimonio, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza, del Poder Judicial del Estado, no corresponda en última instancia a dicho poder; **3)** que la ley vaya en contra de la finalidad del principio de división de poderes, es decir, que con la aplicación de aquélla no se preserve la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas a favor de cada uno de los poderes públicos.

A partir del estudio anterior, se analizó la invalidez y validez de los preceptos impugnados.

Esta minoría no comparte el tratamiento de la resolución, en atención a lo siguiente:

En principio, tendremos que decir que la estructura del estudio al partir de un análisis parcial del artículo 116 constitucional, al no tomar en cuenta aspectos básicos del principio de división de poderes y al estudiar por separado el texto de los artículos impugnados, perdió de vista la verdadera litis constitucional, consistente en estudiar a fondo si la Ley Patrimonial del Estado, puede incluir en sus supuestos al Poder Judicial Local.

En nuestra opinión el análisis que debe realizarse para dilucidar la problemática de la controversia, debe versar sobre el principio de división de poderes, es decir, determinar si éste es flexible o rígido y abordar exhaustivamente el control entre poderes, toda vez que éste es precisamente el tema central a debatir.

En efecto, el determinar si el Ejecutivo Local, por medio de la ley impugnada, puede ejercer un control al Poder Judicial Local en relación a cuestiones presupuestarias, es un aspecto íntimamente relacionado con el principio de división de poderes y con los controles que existen entre aquéllos.

En este sentido consideramos que el estudio debe partir conforme a, si de acuerdo al artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, el principio de división de poderes, en lo particular respecto del Poder Judicial de los Estados, implica que éste pueda administrar su patrimonio por sí mismo, o bien, si tiene que sujetarse a una alguna norma como la aquí impugnada, para lo cual debe determinarse el espíritu de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, con el fin de establecer si es posible que el Poder Judicial del Estado resulte destinatario de la ley impugnada o no, esto es, analizando la ley como un sistema integral, y sólo si se llega a la conclusión de que el Poder Judicial local es destinatario de la norma impugnada, se proceda a estudiar cada precepto en particular.

Por tanto el estudio del asunto debe ir de lo general a lo particular, es decir, determinar primero si conforme a la ley impugnada existe alguna intromisión de las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal a la autonomía presupuestal del Poder Judicial, para después, conforme a ello, determinar la inconstitucionalidad de toda la ley.

Ahora bien, resulta evidente que por sí solos varios de los artículos impugnados no resultan violatorios del principio de autonomía judicial, por tanto, creemos que el estudio debe de partir sobre la inclusión del Poder Judicial en el texto normativo impugnado.

Para poder determinar si la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes puede o no incluir, en sus supuestos, al Poder Judicial local, resulta necesario identificar el marco que establece la Constitución Federal a los Poderes Judiciales locales, para luego analizar el marco constitucional y legal local.

Así tenemos que la existencia en un sistema federal, de los poderes federales y locales, determinan la organización política de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponde a la Constitución General la creación de esos dos órdenes así como la regulación de su organización y funcionamiento. La Constitución de cada una de las entidades federativas debe ser reglamentaria de la Constitución General, así pues, los Estados están sometidos a los mismos principios que la regulan.

El contenido del artículo 116 constitucional dispone que en cada entidad federativa debe existir un Gobernador, una Legislatura y un Tribunal Superior de Justicia.

Desde 1987 se estableció con carácter de obligatorio para los Estados, en el artículo 116 constitucional, la existencia en su estructura interna, de uno de los elementos del Estado de derecho: **el principio de división de poderes**. Además, se estableció la prohibición de que nunca podrán reunirse dos o más poderes estatales en un solo órgano.

La división de poderes en nuestro país no opera de manera rígida sino flexible, ya que el reparto de atribuciones y funciones encomendadas a cada uno de los Poderes no constituye una separación absoluta y determinante sino que entre ellas se presenta una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del Estado en beneficio del pueblo mexicano. Esta colaboración opera por dos medios principales: uno, exigiendo la participación de dos de los Poderes para la validez de un acto, y otro, otorgando a los Poderes facultades que no les resulten propias.

A través de una ley ordinaria no puede el Poder Legislativo otorgar a un Poder una atribución que no le sea propia o que no resulte estrictamente necesaria para hacer efectiva alguna facultad que le corresponda, como tampoco puede dicho Poder a través de la ley secundaria limitar las facultades exclusivas de un Poder o alguna atribución que a su favor consigne expresamente la Constitución, o bien, establecer a su cargo alguna obligación que implique una forma de control por otro Poder si ello no está consignado en la propia Carta Magna o deriva necesariamente de alguna de sus prevenciones.

Tomando en consideración que el Poder Constituyente estableció en el artículo 49 de la Constitución, el principio de división de poderes y el complementario de autonomía de los mismos, imprescindible para lograr el necesario equilibrio entre ellos, debe inferirse que la obligación de rendir informes de uno a otro Poder debe estar consignada en la Constitución.

En el presente caso, para poder determinar si la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes vulnera este principio de división de poderes, al incluir en sus disposiciones al Poder Judicial del Estado, será necesario, en primer término, establecer la esfera de competencias que para tales órganos ha designado la Constitución General de la República.

Así tenemos, que en cuanto al Poder Judicial de los Estados, el artículo 116 de la Constitución Federal dispone, en esencia:

- 1.- Que las constituciones locales señalarán cuáles tribunales integrarán el Poder Judicial del Estado.
- 2.- Las Constituciones Locales y las Leyes Orgánicas de los Estados, deberán de garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, para lo cual se establecerán las condiciones para el ingreso y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
- 3.- Los magistrados deberán reunir para su designación, los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución General.
- 4.- Los magistrados durarán en su cargo el tiempo previsto en la Constitución estatal y podrán ser reelectos. La privación de su cargo se realizará de acuerdo a lo que determinen la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- 5.- Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

Por su parte en relación a las distintas facultades de los Poderes locales, la Constitución del Estado de Aguascalientes sostiene:

ARTICULO 27.- Son facultades del Congreso:

I.- Legislar para el Estado, sobre todas las materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación;

II.-...

III.- Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos del Estado, con vista del proyecto que presente el Gobernador y, en el que no podrá haber partidas secretas;

IV.-...

V.- Recibir las cuentas públicas que mensualmente deben presentarle el Gobernador y los Ayuntamientos dentro de los primeros diez días de cada mes. La ampliación del plazo de entrega de las cuentas públicas, estará sujeta a una solicitud justificada, a juicio del H. Congreso.

Las cuentas públicas se turnarán a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Esta, con el auxilio del órgano técnico, revisará los resultados de la gestión financiera, comprobará que los ingresos estén de acuerdo a la Ley de Ingresos, que las partidas gastadas estén justificadas y de conformidad con las normas de ejecución de los Presupuestos de Egresos.

La cuenta pública deberá revisarse semestralmente por el honorable Congreso del Estado.

VI.- Autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, respectivamente;

VII.- ...

VIII.-... Fijar la división territorial y política, administrativa y judicial del Estado;

IX.-...

XV.- Designar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la terna propuesta por el Ejecutivo; en caso de que los rechace, aceptar una nueva terna, la que tratándose de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se elegirá en términos del Artículo 54 de la Constitución.

Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer en aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de su actividad jurídica;

XVI.- Conocer de las renunciaciones que de sus cargos presenten los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral, los Magistrados del Tribunal Local Electoral y los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, comunicándose su aceptación a la autoridad competente, para que proceda conforme a sus facultades;

XVII.-...

XXVIII.- *Legislar en materia de responsabilidades de los servidores públicos;*

XXIX.-...

XXXIII.-... *Nombrar a los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal en los términos del Artículo 55 de esta Constitución; y*

XXXIV.- *Las demás que le concede esta Constitución y la General de la República.*

ARTICULO 46.- *Son facultades y obligaciones del Gobernador:*

I.-...

V.- *Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la Administración, y al Supremo Tribunal sobre el de Justicia;*

VI.-...

IX.- *Ejercer actos de dominio sobre los bienes de la propiedad del Estado, con autorización del Congreso, tratándose de inmuebles;*

X.-...

XI.- *Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los Tribunales;*

XII.-...

XVII.- *Proponer al Congreso del Estado las ternas para nombrar Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en términos del Artículo 54, y de acuerdo a las disposiciones del Artículo 27 fracción XV de esta Constitución;*

XVIII.-...

XIX.- *Las demás que esta Constitución y la General de la República le confieren.*

ARTICULO 57.- *Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado:*

I.- *Conocer en los juicios civiles y penales de las instancias y recursos que sean de su competencia, conforme a las leyes secundarias;*

II.- *Conocer, en los términos de esta Constitución de los procesos que por ilícitos oficiales se sigan en contra del Gobernador, de los Diputados, del Secretario General de Gobierno, del Procurador General de Justicia y de los Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos;*

III.- *Declarar si ha lugar a formación de causa en contra de los jueces, por ilícitos oficiales o del orden común;*

IV.- *Conocer del nombramiento y remoción de los servidores públicos del Poder Judicial en los términos señalados por los Artículos 55 y 56 de esta Constitución y del Reglamento del Consejo de la Judicatura Estatal;*

V.- *Conceder licencia hasta por treinta días a los Magistrados para separarse de sus cargos, y llamar a los Suplentes respectivos. Las solicitudes de licencia que excedan de este término, serán acordadas por el Gobernador;*

VI.- *Formular su Reglamento Interior y de los Juzgados, los cuales deberán ser sancionados por dicho Consejo;*

VII.- *Nombrar de entre sus Magistrados a Visitadores de los Juzgados a fin de vigilar permanentemente su buen funcionamiento; y*

VIII.- *Las demás facultades que le concede esta Constitución y las que establezca la ley que regule su estructura y funcionamiento, así como las que le confieran otros ordenamientos legales aplicables.*

Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en lo que interesa, establece:

ARTICULO 11.- *Son atribuciones del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:*

I.- Representar al Supremo Tribunal de Justicia en particular o en general al Poder Judicial del Estado, en los términos que establezcan las Leyes, así como en los actos oficiales que se verifiquen, pudiendo para estos efectos designar como su representante a uno de los Magistrados;

II.- Tener a su cargo la parte administrativa del Tribunal, que podrá delegarla en el Consejo de la Judicatura Estatal;

III.-...

V.- Informar al H. Congreso del Estado anualmente en la fecha que éste lo indique de las actividades realizadas en la administración de Justicia;

VI.-...

VIII.- Elaborar en coadyuvancia con el Consejo de la Judicatura Estatal, el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Poder Judicial del Estado;

IX.- Autorizar las erogaciones del presupuesto anual del Poder Judicial y llevar el control de su ejercicio;

X.-...

XVI.- Administrar los bienes, recursos y valores que se adquieran por el Poder Judicial;

XVII.-...

XIX.- Las demás que le confieran las Leyes.

De las disposiciones anteriores se desprenden las facultades que otorga la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial a los tres poderes locales de Aguascalientes, destacando, para el estudio de la presente controversia, que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado **tendrá la facultad de administrar los bienes del Poder Judicial Local**, lo que implica, decisiones de erogaciones y manejo de presupuesto, funcionario, que podrá ser auxiliado por el Consejo de la Judicatura Local y vigilado por su contraloría interna.

A su vez, el Congreso del Estado tendrá facultad de autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos **para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios**, respectivamente, autorización que no necesita el Poder Judicial del Estado, por no haber sido expresamente señalada por la Constitución local.

Ahora bien, el incluir al Poder Judicial en el texto de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, implica una violación al principio de división de poderes y de independencia judicial consagrado en el artículo 116 de la Constitución Federal, por lo siguiente:

1.- La estructura política y administrativa, así como la independencia del Poder Judicial Local deben quedar constreñidos a lo ordenado por la Constitución Federal, la Local y la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116, fracción III, de la Carta Magna. Por tanto, desde nuestra perspectiva, pareciera ser que el hecho de que la Ley Patrimonial de Aguascalientes regule funciones administrativas del Poder Judicial Local, para la adquisición de inmuebles, resulta muy cuestionable en atención a los principios constitucionales reseñados en el artículo 116.

2.- La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, regulan las funciones administrativas del citado poder, así como las facultades del Consejo de la Judicatura Local y de la Contraloría interna, por tanto, al existir normas aplicables en relación al manejo de egresos y administración de recursos, resulta ocioso que en la Ley Patrimonial impugnada se dupliquen funciones, más aún, con disposiciones confusas y extrañas. Por tanto, estimamos que aquélla no debería de comprender al Poder Judicial Local.

3.- La Constitución Local no obliga al Poder Judicial Local a un control recíproco o coordinación entre poderes, en relación con la adquisición de bienes inmuebles, control que sí es existente para el Poder Ejecutivo local y los Ayuntamientos, por disposición expresa del artículo 27 de la Constitución Local, el cual dispone que: **el Congreso del Estado tendrá la facultad de autorizar al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los Municipios, respectivamente.**

Al respecto, debe decirse que a través de una ley ordinaria no puede el Poder Legislativo otorgar a un Poder una atribución que no le sea propia o que no resulte estrictamente necesaria para hacer efectiva alguna facultad que le corresponda, como tampoco puede dicho Poder a través de la ley secundaria limitar las facultades exclusivas de un Poder o alguna atribución que a su favor consigne expresamente el ámbito constitucional (tanto federal como local), o bien, **establecer a su cargo alguna obligación que implique una forma de control por otro Poder si ello no está consignado en el propio orden constitucional o deriva necesariamente de alguna de sus prevenciones.**

Por tanto, si el orden constitucional no autoriza que el Poder Ejecutivo ejerza un control sobre la adquisición de inmuebles que realice el Poder Judicial, resulta claro que la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes es violatoria del principio de división de poderes consagrado en el artículo 116 de la Constitución General de la República.

4.- Aunado a lo anterior, debe decirse, que la independencia del Poder Judicial no sólo debe de ir referida a la permanencia en el cargo de sus titulares, ni a su correcta retribución económica, sino también debe comprender que las decisiones sobre la adquisición de bienes inmuebles, no estén sujetas al voto de representantes de otro poder, ya que para garantizar la transparencia en dichas adquisiciones se deben de tomar en cuenta otros elementos, **como el control interno del Poder Judicial así como los procedimientos de licitación pública, situación que garantizará al Estado las mejores condiciones de contratación.**

Aceptar que otro Poder, que constitucionalmente no tenga la función de ejercer un control lo adopte, puede significar presión para el ámbito del Poder Judicial local, situación que resulta peligrosa, ya que para la correcta resolución de los asuntos de su competencia al Poder Judicial no se le debe agregar una presión externa.

Tomando en consideración que el Poder Constituyente estableció en el artículo 49 de la Constitución el principio de división de poderes y el complementario de autonomía de los mismos, imprescindible para lograr el necesario equilibrio entre ellos, debe inferirse que la obligación de rendir informes de uno a otro poder debe estar consignada en la Constitución y como en el caso, no se encuentra dicha obligación ni en la Constitución General ni en la local, debe concluirse que la Ley Patrimonial impugnada no debe de establecer ningún control, por tanto, la inclusión del Poder Judicial en sus disposiciones resulta violatoria del principio de división de poderes.

5.- Por último, si bien, varias de las disposiciones impugnadas de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes por sí solas no implican violación al principio de división de poderes, lo cierto es que la litis de la presente controversia no debe de ir encaminada a estudiar el texto de cada uno de los artículos, sino a calificar la inclusión del citado Poder en la ley impugnada, por tanto el efecto de la controversia desde nuestra perspectiva debe ir relacionado a excluir de dicho ordenamiento jurídico al Poder Judicial.

Son las razones anteriores, las que nos llevan a concluir que en el caso lo procedente es declarar inconstitucional la inclusión del Poder Judicial Local en la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y a disentir de la sentencia aprobada por la mayoría, en la que se declara la validez e invalidez de diversas disposiciones de ese mismo ordenamiento legal, pronunciamiento que estimamos, pasa por alto el tema global y relevante de la controversia constitucional.- La Ministra, **Olga Sánchez Cordero de García Villegas.**- Rúbrica.- El Ministro, **José de Jesús Gudiño Pelayo.**- Rúbrica.- El Ministro, **Juan N. Silva Meza.**- Rúbrica.

LICENCIADO **JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ**, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de cincuenta y dos fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su original que obra en el expediente relativo a la controversia constitucional 35/2000, promovida por el Poder Judicial de Estado de Aguascalientes, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del propio Estado, se certifica para efectos de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en términos de lo dispuesto en el párrafo Segundo del artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el punto Quinto resolutive de su sentencia dictada en la sesión pública de veintidós de junio del año en curso.- México, Distrito Federal, a 8 de septiembre de dos mil cuatro.- Conste.- Rúbrica.